

Gran Depresión, inestabilidad política y legados ibañistas. El desafío de la restauración del orden institucional en el segundo período presidencial de Arturo Alessandri Palma

Marek Hoehn*

Introducción

La hipótesis que origina este análisis del segundo Gobierno de Arturo Alessandri Palma, consiste en que este período entre 1932 y 1938 debe ser entendido como de restauración del orden institucional, después de una fase de inestabilidad política. Consecuencia de la “*Gran Depresión*”, los años previos al segundo mandato de Alessandri Palma entraron a la historiografía chilena como el “*período de la anarquía*”. El orden fue restaurado a costa de utilizar considerables dosis de autoritarismo y “*mano dura*” contra toda expresión de descontento de parte de la población, lo que en parte se corresponde con las características personales del actor político en cuestión, pero en gran medida es producto de lo que algunos llaman el “*espíritu de la época*”, otros “*estructura*” y Fernand Braudel llama “*larga duración*”¹.

En otras palabras, no podemos evadir la responsabilidad de caracterizar el período analizado mediante acontecimientos de historia política, considerados por Braudel como episodios insignificantes cuando afirma que “*los acontecimientos son polvo*”. Sin embargo, pretendemos en este ensayo aportar con una periodización demarcada por hitos

históricos que ponen comienzo y fin a la “*longue durée*” de Braudel. Para tal efecto, iniciaremos estas reflexiones con una caracterización del período de inestabilidad política al que debe responder Alessandri y que limita su margen de acción, al mismo tiempo, de ofrecerle “*ventanas de oportunidad*” cuyo aprovechamiento es responsabilidad de él, en tanto actor político. Veremos brevemente cómo Alessandri, asututo “*animal político*”, reaparece en el escenario político-presidencial en las elecciones de octubre de 1932 y, finalmente, analizaremos las decisiones más destacadas de su segundo período de gobierno y sus consecuencias, tratando de visualizar las tensiones entre las dimensiones actor y estructura.

Adversarios: auge y caída de Carlos Ibáñez del Campo, 1927-1931

Tras la dimisión de Arturo Alessandri Palma de la Presidencia en 1925, una gran coalición de partidos políticos acordó elegir como Presidente de la República al liberal-demócrata Emiliano Figueroa Larraín, el cual triunfó en las elecciones presidenciales del 24 de oc-

* *Cientista Político, Magíster en Ciencias Políticas e Investigador del Departamento de Estudios, Extensión y Publicaciones de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.*

¹ *Wallerstein, Immanuel, Las incertidumbres del saber, Editorial Gedisa, Barcelona, 2005, pp. 63 y ss.*

tubre de 1925 por amplio margen (sobre un 70% de los votos) a José Santos Salas, representante de la Unión República de Asalariados de Chile (USRACH). El mandato de Figueroa se extendió por un año y cinco meses, el cual estuvo marcado por el control político que ejercía sobre su gobierno su Ministro de Guerra, Carlos Ibáñez del Campo, así como por una continuidad de las prácticas cuasi-parlamentarias². A partir de febrero de 1927 Ibáñez se hizo cargo del Ministerio del Interior, y tempranamente dejó en claro que estaba decidido a no aceptar ni permitir tales prácticas. Sin demora, tomó cartas en el asunto, materializadas en una serie de medidas de carácter represivo. Ibáñez se había convertido en el hombre fuerte de la política chilena. En mayo del mismo año, Figueroa asumió las consecuencias y renunció a su cargo.

En el mismo mes de mayo de 1927, Carlos Ibáñez del Campo se presentó como único candidato a la Presidencia de la República, y a partir de esta fecha, gobernó al país con “*puño de hierro*”, pero manteniendo la apariencia de un régimen constitucional. El entonces Coronel llegó al poder por la vía institucional, mediante un plebiscito que lo eligió unánimemente. También hizo funcionar el Parlamento, pero con una importante particularidad. El Congreso Nacional fue bautizado popularmente como “*Congreso Termal*”, debido a que fue en las Termas de Chillán donde los dirigentes de partidos políticos acordaron evitar un proceso electoral, ya que no daba garantías para una victoria de Ibáñez. Para tal efecto, recurrieron a una cláusula

de la ley electoral que indicaba que, en caso de existir igual número de candidatos al de escaños a asignar, no era necesario realizar una elección. El presidente elaboró las listas de las candidaturas, quitando de esta manera la legitimación democrática al Congreso Nacional. De esta forma, con fecha de 30 de marzo de 1930, se dieron por electos los candidatos presentados, constituyéndose una serie de características de un régimen político autoritario. El poder judicial también tenía un funcionamiento aparentemente normal. “*Pero la censura, la represión de varios partidos políticos y grupos sindicales y las operaciones 'especiales' de la policía secreta determinaron que muchos caracterizaran al gobierno de Ibáñez como dictadura*”³.

El gobierno de Ibáñez tenía pretensiones de crear un “*Chile Nuevo*” mediante —lo que hoy en día se denomina— una dictadura para el desarrollo, concepto que abarca las características de particulares regímenes autoritarios que surgieron en la década de los 60 en América Latina, en el sudeste asiático y en África (en este último continente como consecuencia de los procesos de descolonización) y cuyos pilares fundamentales fueron la unidad nacional y la modernización política y económica bajo un férreo control de un Estado fuerte y autoritario. En este contexto, Ibáñez prometió superar las contradicciones entre clases y combatir las ideologías consideradas “*anti-nacionales*”, entre las que se encontraba el pensamiento marxista. El Partido Comunista fue proscrito y las fuerzas opositoras a su régimen —en particular los movimientos sindicales— severamente reprimidas. El Parlamento fue

² *Discrepamos en este punto de la mayoría de los historiadores que caracterizan el período entre 1891 y 1925 como “Parlamentarismo chileno”. El régimen constitucional de Chile había experimentado una modificación a mayores atribuciones de control y fiscalización para el parlamento, pero nunca dejó de pertenecer a la categoría politológica del “Presidencialismo”.*

³ *Loveman, Brian y Elizabeth Lira, Las Acusaciones Constitucionales en Chile. Una perspectiva histórica, LOM Ediciones y FLACSO Chile, Santiago de Chile, 2000, p. 29.*

degradado a una instancia de mera apelación, más no de legislación.

La crisis económica mundial amenazó con frustrar el sueño de un nuevo Chile y, definitivamente, es uno de los acontecimientos que contribuyó significativamente a la caída del régimen de Ibáñez. La “*Gran Depresión*” se inició en 1929 con el desplome del valor de las acciones en la Bolsa de Nueva York, pero corresponde al agotamiento de un modelo de desarrollo y de comercio internacional cuyos términos de intercambio (*terms of trade*) desfavorecían a las naciones exportadoras de materias primas y de productos sin valor agregado. Una de estas naciones era Chile. A partir del año 1931 nuestro país fue golpeado tan fuertemente por la crisis, que la Liga de las Naciones declaró a Chile como el más afectado por la “*Gran Depresión*”. Las palabras del historiador Gonzalo Vial ilustran la gravedad de la crisis para Chile:

“1931 fue un total descalabro. Dejaron de prestarnos (...) para cualquier fin. No vendíamos nada afuera. No recibíamos moneda foránea para nuestras necesidades más apremiantes (...). ¿Por qué? Por nuestra dependencia extrema de un solo producto de exportación: el salitre. Éste, su subproducto el yodo, y —todavía muy modestamente— el cobre, representaban casi el 90% de nuestras exportaciones totales, e igual porcentaje, en consecuencia, de las divisas que requeríamos para importar. Paralelamente, los gravámenes aduaneros a estas importaciones, y el impuesto a las exportaciones del 'oro blanco', significaban arriba del 80% de los ingresos del Fisco. Sin salitre, entonces, no había importaciones, ni gravámenes a las mismas, ni impuestos al salitre exportado, ni

*consiguientemente recursos para el gasto público”*⁴.

En 1933 el ciclo exportador del salitre llegó a su fin, la participación del nitrato chileno en el mercado internacional se redujo a apenas el 15% de los niveles previos a la crisis. Los países importadores de salitre habían empezado a sustituir el producto chileno por nitratos producidos sintéticamente a menor costo y había tomado medidas para proteger sus economías nacionales, con impuestos aduaneros que impedían, de facto, la compra de salitre a nuestro país. Igualmente catastrófica se había tornado la situación desde los años 20 en el emergente sector cuprífero. Hasta el año 1933, el volumen de producción, los precios del cobre en el mercado internacional y el volumen de las exportaciones chilenas cayeron a niveles sin precedentes. Respecto de 1928/29, el volumen de las exportaciones disminuyó en un 64% y en términos del valor del mineral en un 84%⁵.

El gobierno de Ibáñez intentaba desde 1930 anticiparse a la crisis del salitre, reestructurando la industria salitrera. En marzo de 1931 se creó la Compañía del Salitre de Chile (COSACH) como una empresa mixta, cuyas acciones eran de propiedad privada y del Estado en proporciones iguales. Al mismo tiempo, el gobierno eliminó el impuesto a las exportaciones, principal fuente de ingreso del Estado chileno por más de 50 años. De esta manera, el destino del gobierno de Ibáñez dependía en gran medida de la recuperación del sector exportador y, en particular, del éxito económico de la COSACH. Sin embargo, la

⁴ Vial, Gonzalo, *Las elecciones presidenciales de 1931 y 1932. El retorno del León*, en “*Camino a la Moneda. Las Elecciones Presidenciales en la Historia de Chile 1920-2000*”, San Francisco, Alejandro y Ángel Soto (Editores.), Pontificia Universidad Católica de Chile, Centro de Estudios Bicentenario, Santiago de Chile, 2005, p. 118.

⁵ Rinke, Stefan, *Kleine Geschichte Chiles*, Verlag C.H. Beck, Munich, 2007, pp. 96-97.

industria del salitre nunca más se recuperó y las medidas de racionalización de la COSACH costaron miles de empleos. Finalmente, la crisis sumada a la reestructuración del sector minero afectó a un total de ciento veinte mil personas que perdieron su sustento en el norte grande y migraron hacia la zona central del país, engrosando las filas de los desempleados y de los pobres de las grandes ciudades.

Estas decisiones y sus consecuencias sociales, aquí muy brevemente esbozadas, produjeron un descontento en la población que se hizo cada vez más difícil de contener, debido a que las masas ya no estaban dispuestas a subordinarse incondicionalmente a la voluntad de Ibáñez, especialmente, cuando su gobierno redujo los sueldos de los empleados públicos y de los militares, al mismo tiempo que aumentó los impuestos. Las protestas sociales se hicieron frecuentes y en una de ellas perdió su vida el joven estudiante de medicina, Jaime Pinto, víctima de la represión policial. Tras su funeral, estudiantes y carabineros se enfrentaron a mano armada. Un profesor de historia del Liceo de Aplicación recibió una bala perdida y falleció en el lugar. En la capital chilena había estallado el caos social. Santiago parecía una ciudad en guerra. Al día siguiente, profesionales de varios rubros iniciaron huelgas para derrocar al gobierno⁶. Incapaz de controlar la situación y de garantizar la estabilidad de su gobierno, Ibáñez abandonó la Presidencia y el país. A su dimisión le siguió un período aún más inestable de anarquía y conspiraciones.

Los efectos de la crisis: sucesiones constitucionales y búsqueda de la gobernabilidad, 1931-1932

En el momento de la renuncia de Ibáñez, Pedro Opazo Letelier era presidente del Senado, por lo que debió asumir la Vicepresidencia de la República por sucesión constitucional. El día 26 de julio de 1931 tomó posesión del cargo, organizando un gabinete encabezado por Juan Esteban Montero como Ministro del Interior y Pedro Blanquier como Ministro de Hacienda. Cuando, al día siguiente, los integrantes del nuevo gabinete llegaron a la Moneda, Opazo entregó el mando de la nación al entonces ministro del Interior, Juan Esteban Montero.

Montero asumió la jefatura del gobierno como Vicepresidente y restableció algunas de las libertades civiles suspendidas por Ibáñez, lo que, sumado a su carácter sereno y ponderado, aumentó rápidamente su popularidad. En consecuencia —y a pesar de provenir del radicalismo—, varios partidos de la derecha le ofrecieron la candidatura a la Presidencia de la República en las elecciones que el mismo había convocado. Montero, quien al comienzo dudaba de su candidatura, pronunció la célebre frase: “*Si es así señores, si en realidad cuento con la cooperación sincera de todos sus representados, me someto*”⁷, aceptando ser candidato a la presidencia. Para tal efecto, Montero optó por poner a disposición del Congreso Nacional su cargo de Vicepresidente de la República, con el objetivo de evitar que se sospechara de su intervención, como

⁶ *Documental Nuestro Siglo, TVN, 2000, Parte 1932-1938.*

⁷ *Sepúlveda Rondanelli, Julio, Los radicales ante la historia, Editorial Andrés Bello, Santiago de Chile, 1993, p. 142.*

en el caso de Carlos Ibáñez del Campo en 1927. El Congreso Nacional, sin embargo, desestimó las preocupaciones de Montero y rechazó su renuncia. Montero siguió convencido que su cargo era incompatible con su candidatura. Así que, cuando finalmente fue proclamado candidato el 19 de agosto 1931, entregó al día siguiente su cargo al Ministro del Interior, Manuel Trucco Franzani.

Durante su breve mandato de dos meses y medio, Trucco debió enfrentarse a la “*Sublevación de la Escuadra*”, un levantamiento de marinos que fue sofocado con el apoyo de la recién creada Fuerza Aérea. Se trató de una movilización gremial protagonizada por efectivos de la Armada de Chile entre el 31 de agosto y el 7 de septiembre de 1931, y que —debido a la rigurosidad de la disciplina militar— debió ser considerada una insubordinación y un motín. El movimiento había nacido en reacción a una nueva y considerable rebaja de salarios, que había sido decretada por el gobierno del Vicepresidente Manuel Trucco, en medio de la crisis económica y política que atravesaba Chile en ese momento. Los sublevados presentaron a las autoridades un petitorio, que —en el transcurso de las negociaciones— fue engrosado con demandas cada vez más generales. Ellos no ocultaron su intención de que el movimiento adquiriera características de levantamiento popular. A partir del 5 de septiembre los marinos comenzaron a ser atacados por fuerzas leales al gobierno, intentando una breve resistencia militar, especialmente en Coquimbo y Talcahuano, para luego capitular. Tras este episodio y la victoria electoral de Juan Es-

teban Montero, el Vicepresidente Trucco le entregó su mandato el 15 de noviembre para que Montero retomara la Vicepresidencia del país y asumiera como Presidente de la República el 4 de diciembre de 1931.

Contando con el apoyo de su propio Partido Radical y de los partidos Conservador y Liberal, Montero obtuvo una amplia victoria con un 64% de los votos, derrotando a Arturo Alessandri, candidato del Partido Demócrata; a Manuel Hidalgo de la Izquierda Comunista y a Elías Lafferte del Partido Comunista. No obstante, su gran popularidad y medidas importantes para enfrentar la miseria social, grupos de la izquierda política y también del entorno de los caudillos políticos derrotados, como Ibáñez y Alessandri, iniciaron una férrea oposición al gobierno de Montero. A las tres semanas de haber asumido la Presidencia, Montero se ve enfrentado a un intento de toma de poder por parte de insurgentes comunistas el 25 de diciembre. El intento de derrocar al gobierno se inició con la toma de cuarteles en Vallenar y Copiapó, a lo que las autoridades le restaron importancia, confiados en el éxito obtenido por el gobierno al momento de controlar la “*Sublevación de la Escuadra*”. Sin embargo, cuando los insurgentes intentaron apoderarse del regimiento Esmeralda, que contaba con un gran arsenal de armamento, la respuesta de los militares y de la policía fue contundente, causando varias bajas a los atacantes. En la capital, Montero reaccionó ordenando la ocupación de la sede del Partido Comunista y el allanamiento de las casas de varios dirigentes de dicho

partido. En su efecto, los fusilamientos dejaron un saldo de 36 muertos y la matanza sería recordada por los grupos y partidos de izquierda que derrocarían a Montero sólo meses más tarde.

La situación socio-económica de gran parte de la población chilena seguía siendo insostenible y sólo días más tarde, el 11 de enero de 1932, trabajadores y empleados convocaron a un paro nacional. Sus principales demandas fueron la disolución de la empresa mixta COSACH y la nacionalización de la industria del salitre. La COSACH, creada por Ibáñez y fracasada en su intento de reflotar el sector primario de la economía nacional, se había convertido en símbolo del fracaso gubernamental y la vacilación de Montero fue interpretada como la debilidad de su gobierno. Otra agravante y causal de su creciente impopularidad, fue su negativa de disolver el “*Congreso Termal*” y de convocar a elecciones parlamentarias competitivas.

Los cambios políticos al interior del Partido Radical agregaron conflictividad y oposición al gobierno de Montero. Juan Antonio Ríos presidía este partido y le había correspondido articular la protesta de sus militantes ante los abusos cometidos por el presidente Ibáñez, aunque él en lo personal sentía admiración por algunos de los logros del General. Estas discrepancias le provocaron severas críticas a Ríos así como acusaciones de colaboración con el régimen autoritario. Durante el gobierno de Montero, Ríos fue expulsado de la colectividad, por lo que las fracciones partidarias que lo apoyaban al interior del

Partido asumieron una postura de oposición al gobierno.

Ventanas de oportunidad: la irrupción de los militares en el gobierno, la República Socialista de Chile y las respuestas paramilitares, 1932

El día 4 de junio de 1932, unidades militares de la Base Aérea “*El Bosque*” se dirigieron al Palacio de La Moneda con el objetivo de derrocar al Presidente Juan Esteban Montero, quien se vio forzado a renunciar y, acompañado por sus ministros, se retiró sin ofrecer resistencia. Inmediatamente después, los militares proclamaron la República Socialista de Chile. El General en retiro y adherente ibaíñista, Arturo Puga Osorio, presidió la Junta de Gobierno, acompañado por los civiles Carlos Dávila Espinoza y Eugenio Matte Hurtado. Como Ministro de Defensa asumió el principal protagonista de este golpe de Estado, el Comodoro del Aire, Marmaduke Grove, y la Secretaría General de Gobierno quedó a cargo de Óscar Schnake Vergara. Al día subsiguiente, la Junta de Gobierno resolvió la disolución del “*Congreso Termal*”, desprestigiado popularmente y deslegitimado por las irregularidades de su proceso electoral.

Otras de las primeras medidas de la República Socialista fueron la amnistía de todos los condenados por delitos políticos y sociales —en-

tre quienes se encontraban los marinos que habían participado en la “*Sublevación de la Escuadra*”—, la devolución de pertenencias empeñadas en la Caja de Crédito Popular (especialmente herramientas de trabajo, como máquinas de coser), la reincorporación de 200 profesores exonerados por razones políticas durante el régimen de Ibáñez, así como algunas normas económicas de corte nacionalista y proteccionista, de las cuales muchas quedaron vigentes y siguieron aplicándose durante otros gobiernos.

La Junta, además, creó leyes para castigar a las empresas extranjeras que habían cerrado sus instalaciones en Chile durante la crisis, mediante la confiscación de cuentas bancarias de extranjeros y la revisión de todo tipo de contratos y concesiones suscritas con extranjeros en Chile⁸. Sin embargo, estas no alcanzaron a entrar en vigencia debido a que, después de sólo 12 días, un grupo de oficiales de la Guarnición de Santiago llevaron a cabo otro golpe de Estado, detuvieron y deportaron a la Isla de Pascua a Eugenio Matte, integrante de la Junta de Gobierno, y al Ministro de Defensa, Marmaduke Grove, ante la mirada atónita de todo un país. El presidente de la Junta, Carlos Dávila, permaneció a cargo del gobierno y se autoproclamó Presidente Provisional de la República Socialista.

Durante los 100 días que duró su gobierno, Dávila reestructuró la economía nacional de acuerdo a criterios corporativistas. Con más de 600 decretos, las medidas de corte nacionalista se hacían cada vez más

radicales. Así, por ejemplo, cuentas de ahorro en moneda extranjera fueron convertidas por decreto a la devaluada moneda nacional. Fue creado el Instituto de Comercio Exterior, obligando a los empresarios exportadores e importadores a participar en éste. El Presidente obtuvo derechos plenipotenciarios para expropiar bienes raíces e instalaciones industriales. Con el objetivo de aumentar al apoyo popular a todas sus medidas, Dávila prometió disolver la COSACH, lo que resultó finalmente, de hecho, imposible dada la falta de alternativas para esta empresa.

Con una disminución notable de la popularidad del gobierno de facto y enfrentado a una seguidilla de huelgas y críticas por parte de casi todos los sectores políticos, Dávila se vio expuesto a un nuevo intento de golpe de Estado, esta vez encabezado por el Comodoro del Aire, Arturo Merino Benítez. Si bien, este intento de sublevación contó con un gran apoyo, Merino fue detenido en la ciudad de Ovalle, fracasando su intento de tomar el poder. No obstante, Dávila reconoció su deslegitimación como Presidente Provisorio y renunció a su cargo el día 13 de septiembre de 1932, dejándolo en manos del Ministro del Interior, el General en retiro y ex Comandante en Jefe del Ejército de Chile, Bartolomé Blanche, poniendo fin a la República Socialista.

También el general Blanche experimentó la creciente desconfianza en los militares y la falta de legitimidad de su gobierno. En consecuencia, se produjeron las sublevaciones de las divisiones del ejército en

⁸ Rinke, *op. cit.* p. 99.

Antofagasta y Concepción que contaban con un importante apoyo popular, las cuales exigían el inmediato retorno a la normalidad institucional, lo que implicaba el retiro de los militares de la labor política. De esta manera, Blanche se vio forzado a renunciar el día 2 de octubre 1932, dejando el poder político en manos del entonces Presidente de la Corte Suprema, Abraham Oyanedel, quien se convirtió en Vicepresidente de la República y cuya principal tarea asignada fue la de convocar a elecciones presidenciales para el mismo mes de octubre.

En el mismo año y como manifestación de la desconfianza en los militares por parte amplios sectores de la derecha política, se crearon las Milicias Republicanas. Los militares de la época se caracterizaban por ideales en ciertos grados antioligárquicos y progresistas⁹, lo que les provocó el reproche de estar influenciados por grupos anarquistas y comunistas. Bajo el lema “Orden, Paz, Hogar y Patria”, estas fuerzas armadas irregulares, es decir, paramilitares, reunieron a varias decenas de miles de combatientes civiles y contaron con regimientos distribuidos a lo largo del país, dos escuelas de cadetes, así como con armamento liviano y pesado e, incluso, con aviones. En evidente respuesta a la participación de militares de la Fuerza Aérea en el golpe de Estado de junio 1932 y la posterior proclamación de la República Socialista, la misión declarada de las Milicias Republicanas fue evitar que los militares se volvieran a convertir en actores políticos y atentaran contra el orden institucional del país.

Otro fenómeno de la misma época que merece especial atención, es el nacimiento del Movimiento Nacional-Socialista de Chile (MNSCH) en 1931, el cual contaba con un considerable apoyo¹⁰ de los nacionalsocialistas alemanes. Las doctrinas políticas que alimentaban el MNSCH eran sobre todo el nacional-corporativismo de los Nazis en Alemania, el fascismo italiano y la ideología portaliana chilena. Como tal, no sólo se oponía al marxismo y todas sus vertientes, sino también, al capitalismo liberal y transnacional. Este movimiento obtuvo su creciente apoyo en las juventudes de la clase media y alta, considerando el ejercicio de la violencia como una forma legítima de la lucha política. En 1933 fueron creadas las “*Tropas Nacistas de Asalto*”, grupos paramilitares inspirados en las *Sturmabteilungen* (SA) o “*camisas pardas*” alemanas. Con cerca de 20 mil militantes y más del 2 por ciento de apoyo electoral en las elecciones parlamentarias de 1937, el MNSCH se disolvió en 1938 después de la “*Matanza del Seguro Obrero*”, apoyando finalmente al candidato del Frente Popular, Pedro Aguirre Cerda.

Anti-ibañismos: las elecciones presidenciales de 1932

A las elecciones presidenciales de octubre de 1932 se presentaron cinco candidatos del amplio espectro ideológico chileno, todos ellos pro-

⁹ Ver Bustos, Isidoro, *Die Verfassung der Diktatur. Die Entwicklung der Grundrechte in Chile*, Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile-Lateinamerika, Berlin, 1987.

¹⁰ Ramírez Necochea, Hernán, *El Fascismo en la evolución política de Chile hasta 1970*, en *Revista Araucaria de Chile*, N° 1, Madrid, 1978, pp. 9 y ss.

nunciadamente anti-ibañistas. El primero de ellos fue Arturo Alessandri Palma, propuesto para la candidatura por parte del Partido Radical. El historiador Gonzalo Vial le certifica “una afinidad política y espiritual con el radicalismo, que era auténtica”¹¹. Las asambleas radicales respaldaron con unanimidad a Alessandri como su candidato a la Presidencia de la República. Posteriormente, le manifestaron su apoyo la mayoría de los militantes del Partido Demócrata. Alessandri contaba con un gran apoyo popular debido a que representaba una alternativa a los militares desacreditados políticamente.

La derecha política, específicamente los presidentes del Partido Liberal, Francisco Bulnes, y del Partido Conservador, Héctor Rodríguez de la Sotta, le propusieron a González Videla que se postulara como candidato a la Presidencia. De esta forma, el Partido Radical le habría restado su apoyo a Alessandri en favor del militante y presidente de su propia colectividad. González Videla rechazó la propuesta, fracasando la maniobra de debilitamiento dirigida contra Alessandri. De igual manera, fracasó la propuesta de postergar las elecciones que realizó la derecha política, por la razón de que los plazos extremadamente cortos, definidos por Oyanedel, favorecían a Alessandri.

Conservadores y liberales repudiaron su colaboración “*intima, aunque oculta*” con Marmaduke Grove y la “*neutralidad benévola*”¹² con Carlos Dávila. Sin embargo, el anti-alessandrismo de las cúpulas partidarias no era del todo compartido por las bases de militantes de ambos par-

tidos. Al interior de éstas la figura de Alessandri gozaba de reconocimiento, debido a su lucha contra la dictadura de Ibáñez.

El programa de Alessandri hacía énfasis en la reconstrucción de la vida institucional, por medio de la vigencia irrestricta de la Constitución de la República de 1925, en un “*Gobierno nacional*”, lo que implicaba la atribución exclusiva del Presidente de la República en el nombramiento de los Ministros de su gabinete y la exclusiva responsabilidad de éstos ante él. También enfatizaba materias de descentralización junto a la constitución y funcionamiento de las asambleas provinciales, contempladas por la Constitución. En materia socio-económica, el programa de Alessandri no se caracterizaba por los mismos énfasis que había puesto en las elecciones de 1920. Al contrario, no se refirió a temas sociales.

El Partido Liberal Democrático se hizo representar en estas elecciones por medio de Enrique Zañartu, quien fuera Diputado, Senador y Ministro de Hacienda, tanto del primer gobierno de Arturo Alessandri como de la Junta de Gobierno presidida por Carlos Dávila. Caracterizado como “*agricultor activo y progresista*”¹³, Zañartu se había opuesto vehementemente a medidas fiscales que, durante la “*Gran Depresión*”, pretendieron equilibrar la economía mediante una drástica reducción del gasto público. Zañartu, al contrario, argumentó de manera keynesiana y propuso que tanto el Estado como los productores gastaran más para reactivar la economía, lo que implicaba, sin embargo,

¹¹ Vial, *op. cit.* p. 130.

¹² *Ibíd.*

¹³ *Ibíd.* p. 131.

emisiones sin respaldo. Como Ministro de Hacienda del gobierno de Dávila, puso en práctica estas ideas, aunque sólo parcialmente, debido a que tuvo que dejar su cargo alrededor de un mes antes de que cayera el gobierno de Dávila. Sin embargo, especialmente los agricultores endeudados, amenazados por el remate judicial de sus tierras, agradecieron esta política.

El tercer candidato de la contienda era Héctor Rodríguez de la Sotta del Partido Conservador, otro anti-ibañista acérrimo, pero a la vez, anti-alessandrista. El candidato conservador adscribía muy decididamente al pensamiento del liberalismo económico, de tal manera que rechazaba el pensamiento social-cristiano de muchos militantes —sobre todo los jóvenes— de su partido y que había sido reforzado por la recién publicada encíclica “*Quadragesimo anno*”. No obstante, la candidatura de Rodríguez de la Sotta era considerada un “*saludo a la bandera*”¹⁴ cuyo objetivo radicaba principalmente en preservar la integridad del Partido Conservador y para evitar que éste se dividiera entre seguidores de Alessandri y de Zañartu.

Interesante resulta observar la candidatura de Marmaduque Grove, debido a que aun cuando éste no pudo realizar campaña electoral por encontrarse relegado en la Isla de Pascua, contaba con una considerable popularidad entre las capas sociales más postergadas, expresión de los días de la República Socialista. Acogiendo un recurso de amparo, la Corte de Apelaciones dispuso la libertad del candidato relegado el

día 14 de agosto de 1932, a lo que hizo caso omiso Dávila. Algunas semanas después —la renuncia de Dávila y asunción de Blanche como Presidente de por medio—, la Corte Suprema exigió cumplimiento de lo dispuesto por la Corte de Apelaciones, y Blanche ordenó que se regresara a Grove al continente. El problema logístico que se suscitó era que los viajes a la isla eran muy poco frecuentes, puesto que sólo había un barco al año que realizaba este recorrido. Los adherentes de Grove, finalmente, arrendaron una embarcación que zarpó desde Valparaíso el día 12 de octubre, alcanzó Isla de Pascua al sexto día, regresando de inmediato con Grove a bordo. La nave llegó a Valparaíso el día de las elecciones con la mera posibilidad de observar los escrutinios de las votaciones en las que había sido candidato.

El quinto candidato fue Elías Lafferte Gaviño del Partido Comunista. Lafferte había sido trabajador del salitre, fue secretario de Luis Emilio Recabarren, miembro del Comité Ejecutivo del Partido Comunista, Secretario General Ejecutivo de la Federación Obrera de Chile (FOCH) en 1926 y uno de los fundadores de la Juventudes Comunistas de Chile en 1932. Después de tres candidaturas presidenciales (1927, 1931 y 1932), fue Senador entre 1937 y 1945, y fue reelecto para el período siguiente (1945-1953). Su campaña fue comparada con la de Rodríguez de la Sotta, en el sentido de que su único propósito era mantener la unidad de su partido y evitar que los militantes comunistas votaran por Marmaduque Grove.

¹⁴ *Ibid.*, p. 132 y ss.

Con este panorama, el resultado electoral no debiera sorprender. Arturo Alessandri Palma obtuvo el apoyo electoral del 54,6% de los votantes. Esta cifra equivale a 187.914 personas. Marmaduke Grove recibió 60.858 votos, equivalentes al 17,7%. Héctor Rodríguez de la Sotta contó con la preferencia de 47.207 electores (13,8%), Enrique Zañartu con 42.885 (13,4%) y Elías Lafferte con 4.128 (1,2%).

Sin embargo, estas elecciones también eran parlamentarias y fueron electos los diputados y la totalidad de los senadores, debido a que el parlamento anterior, el “*Congreso Termal*”, había sido disuelto por la República Socialista. El nuevo poder legislativo del período presidencial de Alessandri estaba compuesto por un centro (Partidos Demócrata y Radical) que le era favorable con una mayoría de 26 senadores y 76 diputados, así como por una derecha que le era adversa con 17 senadores y 61 diputados entre parlamentarios de los Partidos Liberal y Conservador.

El caudillo y la restauración del orden institucional: el segundo gobierno de Arturo Alessandri Palma, 1932-1938

El Gobierno de Alessandri se apoyaba tanto en los Radicales y Demócratas, como en los Conservadores y Liberales que aceptaron su

propuesta de un gobierno de “*unidad nacional*”. De hecho, dos importantes cargos ministeriales fueron otorgados a políticos de derecha: Gustavo Ross asumió como Ministro de Hacienda y Emilio Bello en Defensa. Asimismo, el gobierno contaba con el apoyo de los grupos paramilitares de extrema derecha, las Milicias Republicanas, con el objetivo de alcanzar un objetivo fundamental: “*La restauración del orden y de la seguridad interna*”. El inicio de la década de los 30 se caracterizaba por una enorme polarización y por enfrentamientos frecuentes entre grupos de izquierda y de extrema derecha, como las “*Tropas Nacistas de Asalto*”.

La existencia de fuerzas de choque compenetradas por ideologías de extrema derecha no fue, sin embargo, una particularidad chilena sino, en algún grado, el “*espíritu de la época*” entre las guerras mundiales. Recordemos que durante el proceso de hacerse del poder en Alemania, los nacionalsocialistas contaron con el apoyo de tropas de asalto, llamadas *Sturmabteilung* (SA) o, por el color de sus uniformes, “*camisas pardas*”. La SA jugó un rol decisivo en el ascenso político de los nazis, debido a que fue la encargada de amedrentar al adversario político y de disolver violentamente sus reuniones y manifestaciones, en particular, las de los socialistas y comunistas. Después de su nombramiento como Canciller, Hitler incluso utilizó a la *Strumabteilung* como policía auxiliar.

El democráticamente legitimado gobierno de Alessandri también re-

curría a estados de excepción constitucional para mantener el orden interno. Se dictó la Ley de Seguridad Interior del Estado, que controlaba y prohibía asambleas y manifestaciones políticas, y hasta suspendió temporalmente el Congreso Nacional. Las medidas represivas del gobierno aumentaron, tanto en cantidad como en tenacidad. Así, por ejemplo, en el año 1934 en Ranquil, zona campesina en el alto Bío-bío, efectivos de Carabineros fueron llamados a sofocar un alzamiento localmente muy limitado de campesinos y obreros, con los cuales se enfrentaron siendo abatidos cientos de ellos, deteniendo a otros 500 para enjuiciarlos en Temuco. Sin embargo, a su destino sólo llegaron 23 detenidos, siendo acibillados 477 de ellos en el “*trayecto*”¹⁵. Asimismo, a pesar de la prohibición de huelga, los trabajadores ferroviarios del Estado se movilizaron y pararon sus actividades en diciembre de 1936. En consecuencia, fueron brutalmente reprimidos por las fuerzas del orden, causándoles la muerte a decenas de trabajadores. Su legado es la creación de la Confederación de Trabajadores de Chile y la reconquista del derecho a huelga en 1938.

Debido a las cada vez más visibles tendencias represivas de su gobierno, el Partido Radical decidió distanciarse de Alessandri y generar alianzas políticas con los partidos de izquierda. Sin embargo, esta decisión no se tomó sólo en rechazo de la represión alessandrista, sino también, y sobre todo, por los cambios en el ámbito internacional. El séptimo congreso mundial de la Internacional Comunista decidió en 1935 la estrategia de los Frentes Populares, pactos electorales entre

partidos de centro-izquierda e izquierda inspirados en los Frentes Populares de España y Francia, para combatir políticamente la amenaza fascista que surgía desde los países del “*Eje*”. La opción de los radicales no estuvo libre de oposición interna, pero el ala izquierda del partido logró imponerse y en 1936 se creó el Frente Popular chileno.

En la dimensión económica, el segundo gobierno de Alessandri se caracterizó por la continuación de la política de industrialización de gobiernos anteriores, por intermedio de una fuerte intervención estatal como agente principal de las inversiones. Esta decisión, se inició recién después del impacto severo de la crisis económica mundial y, ciertamente, no fue producto de preferencias de política económica de Alessandri ni de su ministro Ross. La fuerte dependencia del sector exportador, especialmente del salitre, cuyo precio en el mercado internacional fue, en gran medida, determinado por los compradores del producto y no por sus productores, había sido reconocida como problema u obstáculo para el desarrollo económico nacional. Gustavo Ross, un “*liberal manchesteriano*”, no era obviamente un exponente del nacionalismo económico, pero las estructuras económicas internacionales y la crisis de las mismas no le dejaban otra opción. La política económica liberal debió ser dejada atrás y el control de la divisa, las restricciones a las importaciones así, como, el aumento de aranceles proteccionistas —tanto a las exportaciones como a las importaciones— se hacían imprescindibles para fomentar la propia producción industrial y combatir en un plazo muy breve las extraordinarias cifras

¹⁵ Morales, Reinaldo, *Levantamiento de Indígenas y Campesinos, el 5 de julio de 1934. La matanza de Ranquil*, [en línea], Santiago de Chile [fecha de consulta: 07 de noviembre de 2009]
http://www.archivochile.com/Historia_de_Chile/html/ranquil.html

de desempleo, que alcanzaron su nivel más alto en 1932. Como tal, no responde solo al voluntarismo de la administración de Alessandri, menos si esto implicaba una continuidad de las políticas adoptadas por el régimen de Ibáñez, sino a necesidades estructurales. De hecho, políticas económicas de similares características pueden ser observadas en, prácticamente, todo el mundo occidental.

De esta forma, la “*Gran Depresión*” también ofreció oportunidades, debido a que exigió medidas extraordinarias para manejar la crisis y mitigar el sufrimiento de la población. Así, Alessandri decidió suspender el pago de la deuda externa por la desastrosa situación en la que se encontraba el fisco. Una de las consecuencias de esta decisión fue la devaluación de los bonos emitidos por el Estado chileno. El gobierno decidió volver a adquirir estos bonos a precios muy disminuidos, con lo que logró reducir la deuda externa chilena en cerca de un tercio de su valor anterior.

Resultados positivos también pudieron observarse en el proceso de industrialización. Si bien el sector industrial de la economía era aún mucho menos importante que el sector exportador, éste se recuperó con mayor rapidez que el segundo. El año 1935 la producción industrial chilena se duplicó respecto de las cifras previas a la Primera Guerra Mundial, que posicionó a Chile entre las naciones líderes del desarrollo industrial en América Latina¹⁶. Debido a que las importaciones de productos manufacturados se redujeron a casi una décima parte de

su valor anterior a la crisis, la industria nacional tuvo que compensar esta falta, lo que a su vez permitió absorber gran parte de la cesantía.

A pesar de los éxitos económicos, la recuperación de la crisis, el compromiso social asumido por el Estado y la represión de las manifestaciones de descontento de algunos sectores sociales, el movimiento obrero se fortalecía significativamente, después de un reflujó durante la dictadura de Ibáñez. El creciente número de trabajadores industriales contribuyó a este proceso. También el pueblo mapuche empezó a movilizarse políticamente. En 1932, bajo el liderazgo de Manuel Aburto Panguilef, en el marco del XI Congreso Araucano organizado por la Federación Araucana y en el momento más álgido de la crisis económica, proclamó la creación de una “*República Indígena*” federada al Estado chileno. Algunos años más tarde, en 1935, fue creada la *Corporación Araucana*, una influyente organización indígena que logró representar los intereses del pueblo mapuche y disminuir las conflictividades entre movimientos obreros e indígenas.

También en 1932, como antes se señaló, se fundó en Chile el partido “*Movimiento Nacional Socialista*” (MNS) encabezado por Jorge González von Marées e inspirado en el movimiento nazi alemán. En las elecciones parlamentarias de 1937 el MNS obtuvo un apoyo electoral de un 2,04% y González von Marées, junto a dos de sus camaradas, fueron electos diputados. En la primera de las sesiones del Congreso se produjo un altercado entre los diputados en el transcurso del cual Gonzá-

¹⁶ Rinke, *op. cit.* p. 103.

lez von Marées efectuó un disparo al interior de la sala. Fue detenido temporalmente y desafortunado en junio de 1938.

En la medida que se aproximaban las elecciones del mismo año, las tensiones políticas entre partidos y movimientos aumentaron considerablemente, entre otras razones, porque volvió a aparecer en la escena política el General Carlos Ibáñez del Campo. Esta vez, lo hizo como candidato de la Alianza Popular Libertadora, apoyada por el Movimiento Nacional Socialista. La izquierda, agrupada en el Frente Popular, se hizo representar por Pedro Aguirre Cerda y el candidato del continuismo alessandrista fue Gustavo Ross. El día 4 de septiembre 1938, miles de simpatizantes de Ibáñez realizaron una “*Marcha de la Victoria*”¹⁷ en el centro de la capital, vestidos de uniformes pardos y luciendo la cruz esvástica. Solo días antes de las elecciones presidenciales la tensión política era de tal magnitud, que muchos temían que estallaran conflictos violentos, especialmente, considerando las consignas de los nacistas e ibañistas, tales como “*Mi general, estamos listos*”.

El intento de golpe de Estado no se hizo esperar. Al día siguiente más de 60 integrantes del MNS y de las *Tropas Nacistas de Asalto* decidieron tomarse la Casa Central de la Universidad de Chile en el centro de Santiago y el edificio de la Caja del Seguro Obrero a menos de una cuadra del Palacio Presidencial. Los nacistas estaban convencidos que sólo una unificación de las fuerzas opositoras o un golpe de Estado podía evitar la victoria electoral del candidato alessandrista. El intento

de golpe, no obstante, fue un fracaso. Durante algunas horas golpistas y Carabineros (reforzados posteriormente por efectivos del ejército) intercambiaron disparos hasta que los nacistas finalmente se rindieron y fueron arrestados. Los detenidos en la Universidad de Chile fueron trasladados a la Caja del Seguro Obrero, donde se produjo la masacre. Una vez más, adversarios políticos hechos prisioneros fueron acribillados por las Fuerzas Armadas y de Orden sin darles oportunidad de un debido juicio como lo exige el Estado de derecho. Entre ellos, se encontraba el funcionario del Seguro Obrero Alberto Cabello, quien había sido detenido por error.

“Los nazistas, en tanto, con las manos en alto son colocados vueltos hacia la pared en la escalera. Los oficiales Pezoa y González mandaron entonces al teniente Angellini a consultar sobre qué hacer. El general Arriagada, por intermedio del teniente coronel Reynaldo Espinosa Castro, contestó textualmente: ‘¿Que no entienden lo que se les dice? ¡Que los suban arriba a todos y que no baje ninguno!’. Pezoa, a los pocos minutos, recaba una orden escrita, la que le fue enviada (“*De orden de mi general y del gobierno, hay que liquidarlos a todos*”). Una orden manuscrita del prefecto jefe, coronel Jorge Díaz Valderrama, ratificó la anterior. Pezoa, entonces, ordena el cumplimiento a González, el cual se niega alegando que la orden es contraria a los principios de la institución. Se dirige a la Intendencia, intercede ante sus superiores para no cumplir la orden, recibiendo por respuesta: “*¡Es orden del gobierno!*”¹⁸.

El fracaso del golpe de Estado obligó a Carlos Ibáñez a bajar su candi-

¹⁷ Balart Contreras, René, *La Masacre del Seguro Obrero. El ‘nunca más’ a través de la historia*, en *Revista Punto Final*, [en línea], Santiago de Chile [fecha de consulta: 09 de noviembre de 2009]

<http://www.puntofinal.cl/554/seguurobrero.htm>

¹⁸ *Ibíd.*

datura poco antes de las elecciones. En una actitud miope que buscaba evitar a toda costa la victoria de Ross y del alessandrismo, los partidos que habían apoyado a Ibáñez decidieron apoyar públicamente a Pedro Aguirre Cerda de la coalición anti-fascista. De todas formas, la masacre en el Seguro Obrero causó tal conmoción y repudio que Gustavo Ross no logró vencer en los comicios y que, aunque fuera por menos de diez mil votos, ganara Pedro Aguirre Cerda del Frente Popular que representaba a los partidos de izquierda.

La historia juzga a los actores, no a las estructuras: la acusación constitucional contra Arturo Alessandri Palma

Hemos tratado, probablemente de manera insuficiente, de relacionar el margen de acción del que disponen los actores políticos, limitado por las estructuras que, a su vez, son creadas por actores. Este intento no responde, por ningún motivo, al propósito de liberar a los actores de su obligación de responder por sus actos y omisiones. Si bien, pensamos que en los relatos historiográficos las estructuras políticas, económicas y sociales suelen subestimarse, no suscribimos a una apologetica de los actores. Por esta razón insistimos en agregar a estas reflexiones sobre el segundo período de gobierno de Arturo Alessandri Palma, la acusación constitucional presentada por diputados de varios

partidos de izquierda así como por el líder del movimiento nacista, González von Marées, el 17 de marzo de 1939, cuando Alessandri ya había abandonado la Presidencia de la República. Alessandri fue acusado por violar varios artículos de la Constitución de 1925, en relación a la matanza en la Caja del Seguro Obrero el día 5 de septiembre de 1938.

Después de interrogar a una serie de participantes en los hechos, la comisión investigadora pudo constatar maniobras de encubrimiento consistentes en comprar el silencio de la tropa y en ascensos otorgados con el mismo fin. Asimismo, fueron detectadas presiones ejercidas sobre los ministros de los tribunales por parte de Alessandri. En su informe, la mayoría de la comisión afirma haber descubierto: *“los hilos de una tenebrosa y sostenida maniobra que tendió a mantener en la impunidad a los asesinos ejecutores y a los instigadores de este crimen horrendo”*¹⁹.

El diputado Fernando Guarello, insistiendo en las maniobras realizadas por Alessandri, sostuvo que:

“El ex-Presidente de la República no solamente aparece como autor de la violación constitucional que dispone que esos prisioneros pertenecían a la justicia, puesto que podían ser detenidos 'para el único objeto de ser conducidos ante un Tribunal competente', sino que en el desarrollo de la investigación ha aparecido otra cosa más grave que afecta directamente al Presidente de la República: el delito de encubrimiento en el peor de los casos, el de encubrimiento de la más

¹⁹ Donoso, Ricardo, *Alessandri, agitador y demoleador, Tomo II, Fondo de Cultura Económica, México D.F., 1954, p. 308; citado por Loveman y Lira, op. cit. pp. 37-38.*

*horrorosa masacre dentro del territorio nacional*²⁰.

Claramente no compartimos la opinión acerca del carácter superlativo de la matanza en el Seguro Obrero. Hubo otras masacres tan o más horrosas durante el mismo período de gobierno de Alessandri, como también, durante su primer mandato, como son la masacre de los obreros de la oficina salitrera de San Gregorio en 1921 y La Coruña en 1925. De todas formas, no pretendemos sopesar la gravedad de los hechos contabilizando víctimas.

Casi la mitad de los parlamentarios consideró que Alessandri había violado la Constitución de la República, siendo responsable del asesinato de estudiantes y trabajadores en la Caja del Seguro Obrero y habiendo influido de manera impropia en el funcionamiento del poder judicial, pretendiendo impedir la investigación de los hechos. El informe de la minoría de la comisión investigadora, al contrario, sostenía que no se pudo demostrar que el ex-mandatario hubiera cometido ninguna infracción constitucional. El 4 de abril, la acusación constitucional en su contra fue rechazada por 66 votos conservadores y liberales, contra 53 votos falangistas, socialistas, radicales y comunistas.

Los procesos judiciales en contra de los otros responsables de los asesinatos cometidos resultaron en la condena al general Arriagada y de los oficiales González Cifuentes y Bautista Pezoa a 20 años de presidio

mayor y a la inhabilitación absoluta y perpetua para cargos y oficios públicos. Sin embargo, a pocos días de la sentencia del Juzgado Militar, el 10 de julio de 1940, el Presidente Pedro Aguirre Cerda indultó a todos los condenados en este caso²¹.

Consideraciones finales

En 1932, Arturo Alessandri Palma fue elegido Presidente de la República por un segundo período. Durante su mandato se puso como objetivo implementar la Constitución Política del 1925, sin embargo, su gobierno fue caracterizado por reiterados decretos de estados de excepción constitucional. En un contexto sumamente difícil, debido a la crisis económica mundial, Alessandri se vio enfrentado a la tarea de otorgarle estabilidad política al país y restaurar el orden institucional, después de un período de incertidumbre política y “*anarquía*”. Para cumplir con este objetivo recurrió a la represión severa de sus opositores, fueran estos campesinos e indígenas, organizaciones obreras y sindicales o movimientos políticos de extrema derecha como los nacistas. Los acontecimientos de “*longue durée*” le plantearon una difícil tarea, y —en la opinión del autor de estas reflexiones— Alessandri no estuvo a altura de las circunstancias, desdibujándose el líder popular de su primera administración y tiñendo con represión y autoritarismo esta segunda.

²⁰ *Ibid.* pp. 309-310.

²¹ Loveman y Lira, *op. cit.* p. 38.

Bibliografía

Balart Contreras, René, *La Masacre del Seguro Obrero. El 'nunca más' a través de la historia*, en Revista Punto Final, Edición electrónica, [en línea], Santiago de Chile [fecha de consulta: 09 de noviembre de 2009].
<http://www.puntofinal.cl/554/seguuroobrero.htm>

Bustos, Isidoro, *Die Verfassung der Diktatur. Die Entwicklung der Grundrechte in Chile*, Forschungs - und Dokumentationszentrum Chile - Lateinamerika, Berlin, 1987.

Loveman, Brian y Elizabeth Lira, *Las Acusaciones Constitucionales en Chile. Una perspectiva histórica*, Ediciones LOM y FLACSO Chile, Santiago de Chile, 2000.

Morales, Reinaldo, *Levantamiento de Indígenas y Campesinos, el 5 de julio de 1934. La matanza de Ranquil*, en Archivo de Chile, [en línea], Santiago de Chile [fecha de consulta: 07 de noviembre de 2009]
http://www.archivochile.com/Historia_de_Chile/html/ranquil.html

Ramírez Necochea, Hernán, *El Fascismo en la evolución política de Chile hasta 1970*, en Revista Araucaria de Chile, N° 1 (Madrid 1978), Madrid, 1978, pp. 13-15.

Rinke, Stefan, *Kleine Geschichte Chiles*, Verlag C.H. Beck, Munich, 2007.

Sepúlveda Rondanelli, Julio, *Los radicales ante la historia*, Editorial Andrés Bello, Santiago de Chile, 1993.

Televisión Nacional, *Documental Nuestro Siglo*, Parte 1932-1938.

Vial, Gonzalo, *Las elecciones presidenciales de 1931 y 1931. El retorno del León*, en “Camino a la Moneda. Las Elecciones Presidenciales en la Historia de Chile 1920-2000”, San Francisco, A. y A. Soto (Editores), Pontificia Universidad Católica de Chile - Centro de Estudios Bicentenario, Santiago de Chile, 2005, pp. 117-137.

Wallerstein, Immanuel, *Las incertidumbres del saber*, Editorial Gedisa, Barcelona, 2005.